**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CINCUENTA Y SIETE CIVIL MUNICIPAL**

Bogotá D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Referencia 11001 40 03 057 2021 00864 00 Acción de Tutela

Cumplido el trámite de rigor procede el Despacho a proferir el fallo que corresponda dentro de la acción constitucional del epígrafe.

I. ANTECEDENTE

1. La señora JULIA NELLY ALVAREZ AVILA representada por el señor JOSE GABRIEL CALDERON CUBILLOS, instauro acción de tutela contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL para obtener la protección de los derechos fundamentales a la propiedad, libre administración de bienes y petición, que consideró vulnerado por parte de la entidad encartada.

2. La situación fáctica planteada se compendia a:

2.1. El señor José Gabriel Calderón Cubillos en calidad de apoderado general de la señora Julia Nelly Álvarez Ávila, en el mes de marzo de 2020 solicitó certificación de cabida y linderos ante la entidad cuestionada.

2.2. El 19 de mayo de 2020, se le comunicó que debía allegar cierta documentación para atender su requerimiento, la cual se subsano en oportunidad.

2.3. El 21 de agosto de 2020, la entidad cuestionada le informó que se generó un nuevo radicado bajo el numero No. 627251 del 01 de septiembre de 2020, aduciendo que los documentos se adjuntaron de forma extemporánea.

2.4. Advierte, que la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital ha excedido el término para pronunciarse frente a su solicitud, causándole perjuicios económicos, como quiera que el inmueble de su propiedad ya fue enajenado a un tercero, pero no ha podido sentar la escritura de compraventa debido a que no se cuenta con el certificado donde constes la cabida y los linderos del predio.

3. Pretenden a través de esta vía el amparo de las prerrogativas invocadas, ordenando a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL, *“...se realice todas las acciones tendientes a expedir la certificación de cabida y linderos solicitada desde abril de 2020 (...) notifique al señor JOSE GABRIEL CALDERON CUBILLOS de la visita que se debe realizar al predio para poder expedir la certificación...”*

II. TRAMITE PROCESAL

1. Este Despacho avocó el conocimiento de la acción mediante auto calendado 2 de septiembre de 2021, ordenándose notificar a la Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital para que ejerciera su derecho de defensa, y contradicción.

2. La Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital manifestó, que mediante oficio No. 2021EE33467 del 7 de septiembre de 2021 se resolvió la solicitud incoada por la parte actora, donde se le indicó que no era viable realizar la actualización cartográfica en las bases de datos de dicha entidad, y tampoco era procedente expedir la certificación de cabida y linderos peticionada, ya que se evidenciaron diferencias entre el levantamiento topográfico aportado por la accionante, y la información digital cargada previamente por la entidad, correspondiente al levantamiento topográfico, y la Ortofoto que identifica algunos puntos del predio.

Por tanto, no hay claridad en la ubicación real de la manzana en relación al predio referido por la accionante, pues se encuentran desplazamientos de vértices en el trazado del estudio aportado. Razón por la cual se emitieron una serie de recomendaciones a efectos de lograr la claridad frente al tema, y se le informó los términos con los que cuenta para interponer los recursos de Ley en contra de la decisión adoptada.

III. CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela consagrada en la Constitución Política de 1991, se creó como una vía sumaria, preferente, y perentoria para proteger los derechos fundamentales, que hayan sido amenazados o violentados por las autoridades públicas o los particulares. En dicho evento, cualquier sujeto que se encuentre en estado de indefensión y al que se pueda causar un perjuicio irremediable, podrá acudir al juez constitucional en defensa de las prerrogativas conculcadas como mecanismo transitorio, siempre y cuando no disponga de otro medio de defensa judicial. La vía constitucional no sustituye los mecanismos ordinarios principales, ni modifica las reglas de la competencia de los jueces, ni crea instancias adicionales a las existentes.

2. El problema jurídico a dilucidar, se circunscribe a verificar si la Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital, ha vulnerado los derechos fundamentales a la propiedad, libre administración de bienes y petición de la señora Julia Nelly Álvarez Ávila.

3. Para desatar tal cuestionamiento, considera el Despacho necesario adelantar el estudio del alcance del núcleo esencial del derecho de petición, como una prerrogativa fundamental expresamente consagrada en el artículo 23 de la Carta Política de Colombia. Cabe advertir, que dicho precepto normativo, surge como un mecanismo para obtener una respuesta por parte de una autoridad pública o privada, cuya decisión debe ser de

fondo, clara y precisa. Los pronunciamientos tardíos y ambiguos no constituyen una contestación efectiva, ya que lesionan el núcleo esencial de dicho derecho, puesto que no se obtiene una solución a lo peticionado.¹

La Jurisprudencia Constitucional ha identificado, que el núcleo esencial del derecho de petición incluye: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar en términos respetuosos solicitudes ante las autoridades públicas y los particulares; b) el destinatario tiene la obligación de tramitar y resolver las peticiones incoadas dentro de los términos señalados por la Ley; c) la resolución debe ser clara, precisa y consecuente con las peticiones elevadas, no es admisible las respuestas evasivas; d) el contenido de la respuesta puede ser favorable o desfavorable a lo pedido; y e) se debe notificar la contestación dada, en aras de garantizar el derecho fundamental al debido proceso.²

Ahora bien, frente a los términos para resolver los derechos de petición, el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 prevé que las peticiones de orden general deberán resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Exceptuando las peticiones de documentos y de información que deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Términos que fueron modificados dentro del marco de la emergencia económica, social y ecológica desatada por la pandemia del coronavirus del Covid – 19. El artículo 5 del Decreto 491 de 2020, señala que todas las peticiones que se presente durante tiempo que dure la emergencia deberán resolverse dentro de los (30) días siguientes a su recepción. Las que sólo se traten de peticiones de documentos y de información se resolverán dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción.

De igual forma, la Corte Constitucional en varios pronunciamientos ha precisado que los elementos estructurales del derecho de petición, se limitan a establecer que: (i) toda persona natural y/o jurídica podrá presentar peticiones respetuosas de interés general o particular, (ii) la solicitud podrá realizarse de forma verbal o escrita, y (iii) no se requiere invocar una técnica específica para incoarlo.³

---

¹ Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

² Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 11001030600020150000200 (2243), ene. 28/15, C. P. Álvaro Namén Vargas

³ "...Elementos que conforman el derecho fundamental de petición (...) Esta Corporación se ha pronunciado sobre los elementos estructurales que componen el derecho de petición. Particularmente, en la sentencia C-818 de 2011, reiterada por la C-951 de 2014, se refirió a los siguientes elementos: (...) Toda persona tiene derecho a presentar peticiones a las autoridades por motivos de interés general (...) Tanto las personas naturales como las jurídicas son titulares del derecho fundamental de petición (...) La petición puede ser verbal o escrita (...) La Corte ha señalado que el artículo 23 de la Norma Superior no hace ninguna diferenciación entre las peticiones presentadas de forma verbal y las escritas, en esa medida los dos tipos de solicitudes se encuentran amparadas por el derecho fundamental de petición (...) Las peticiones deben ser formuladas de manera respetuosa (...) Este Tribunal ha establecido que las solicitudes solo tienen el amparo constitucional cuando son presentadas en términos respetuosos. Particularmente la sentencia T-353 de 2000, resaltó el deber de respeto a la autoridad ante la cual se presenta la petición, pues de lo contrario la obligación de responder no nace a la vida jurídica. En este sentido, de forma excepcional es posible rechazar una solicitud que se considere irrespetuosa, sin embargo, esta interpretación es restrictiva, en consideración a que no toda petición puede tacharse de esa manera para sustraerse de la obligación de dar una respuesta de fondo (...) La informalidad de la petición (...) La Corte ha insistido en diferentes oportunidades que el derecho de petición se ejerce a pesar de que las personas no lo digan de forma expresa. En este sentido, si una autoridad exige que se

4. En la Resolución No. 1149 del 2021, se fijaron los parámetros que debe tenerse en cuenta frente a la reglamentación técnica de la formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral. De igual forma se desarrolló el tema de mutaciones catastrales las cuales deben ser resueltas por la Administración en los términos previstos en la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) las normas que lo modifique, adicione o derogue (artículo 16). Si se requiere realizar actividades de campo o que comprometa información de terceros, el término previsto en dicha normatividad se duplicará.

5. La doctrina Constitucional, en punto a la configuración de los elementos facticos que debe demostrarse al incoarse la vulneración al derecho de petición, señaló entre otros en fallo T - 489 de 2011:

“...La carga de la prueba en uno y otro momento del análisis corresponde a las partes enfrentadas: debe el solicitante aportar prueba en el sentido de que elevó la petición y de la fecha en la cual lo hizo, y la autoridad, por su parte, debe probar que respondió oportunamente. La prueba de la petición y de su fecha traslada a la entidad demandada la carga procesal de demostrar, para defenderse, que, al contrario de lo afirmado por el actor, la petición sí fue contestada, resolviendo de fondo y oportunamente. Pero si ante el juez no ha sido probada la presentación de la solicitud, mal puede ser condenada la autoridad destinataria de la misma, pues procesalmente no existe el presupuesto del cual se deduzca que, en tal evento, estaba en la obligación constitucional de responder.”

En este orden, no basta por tanto que el accionante afirme que su derecho de petición se vulneró por no obtener respuesta. Es necesario respaldar dicha afirmación con elementos que permitan comprobar lo dicho, de modo que quien dice haber presentado una solicitud y no haber obtenido respuesta deberá presentar copia de la misma recibida por la autoridad o particular demandado o suministrar alguna información sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar que acompañaron la petición, a fin de que el juez pueda ordenar la verificación...”

6. Traído el citado precedente jurisprudencial al asunto sub-examine, se advierte preliminarmente que no es procedente amparar los derechos deprecados por la señora Julia Nelly Álvarez Ávila representada por el señor José Gabriel Calderón Cubillos, habida cuenta que no se encontró probada la afirmación de la quejosa, sobre la presentación de la solicitud correspondiente al radicado 2020-6272251 del 1 de septiembre de 2020.

En efecto, y una vez revisada la documental anexada junto con el escrito de tutela, solo se observa un memorial donde se solicitó información acerca

---

diga específicamente que se presenta una solicitud de petición en ejercicio de este derecho, impone al ciudadano una carga que no se encuentra prevista en la ley ni en la Constitución Política...”. Sentencia 238 de 2018.

del trámite “*correspondiente a CABIDA Y LINDEROS del predio con matrícula inmobiliaria 50N-20021241*”. Luego no obra constancia alguna donde se pueda entrar a verificar los términos en que se elevó la petición aducida, con el ánimo de constatar que la respuesta dada por la Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital responde integralmente al pedimento.

Cabe precisar que quien alega la vulneración del derecho de petición tiene la carga de demostrar su radicación, presupuesto que fue desconocido por la actora, ya que se omitió la petición inicial; evidenciándose de tal forma la inexistencia de los elementos facticos que permiten la configuración de la obligación constitucional de responder oportunamente la solicitud incoada.

7. Por otro lado, también se advierte que la acción de tutela no es procedente dado que la misma no cumple con los requisitos de subsidiariedad e inmediatez,⁴ pues nótese que la discusión refutada en esta sede constitucional debe ser solucionada por la propia Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital, en la medida que la inconformidad planteada por el quejoso fue resulta por oficio No. 2021EE33467 del 7 de septiembre de 2021, contra la cual cabe recurso de reposición ante el Subgerente de Información Física y Jurídica de dicha entidad, y en subsidio apelación ante la Dirección de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.

En efecto, se advierte que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para entrar a determinar la procedencia o no del certificado de cabida y linderos del predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20021241, y de la aceptación de la mutación catastral; ya que la competencia del Juez Constitucional esta direccionada a la protección efectiva de los derechos fundamentales, de tal manera que no está previsto la incursión de asuntos de otras jurisdicciones. Por lo anterior, se infiere que la accionante debe agotar los recursos de Ley, a efecto de obtener el certificado requerido. De igual forma se itera, que en atención a los presupuestos de subsidiario y residual, resulta improcedente habilitar el amparo constitucional, máxime cuando la quejosa no demostró la configuración de un perjuicio irremediable, sino que se persigue evitar una sanción pecuniaria.

Recuérdese, como lo tiene sentado la doctrina Constitucional, que la acción de amparo no ha sido instituida para suplir los trámites ordinarios, ni para modificar las reglas que fijan los diversos ámbitos de competencia de los Jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, tampoco para

---

4 ...Frente a la necesidad de preservar el principio de subsidiariedad de la acción de tutela, se ha sostenido que aquella es improcedente si quien ha tenido a su disposición las vías judiciales ordinarias de defensa, no las utiliza ni oportuna ni adecuadamente, acudiendo en su lugar a la acción constitucional. Ello por cuanto que, a la luz de la jurisprudencia pertinente, los recursos judiciales ordinarios son verdaderas herramientas de protección de los derechos fundamentales, por lo que deben usarse oportunamente para garantizar su vigencia, so pena de convertir en improcedente el mecanismo subsidiario que ofrece el artículo 86 superior. (...) “Entendida de otra manera, la acción de tutela se convertiría en un escenario de debate y decisión de litigios, y no de protección de los derechos fundamentales”. Sentencia T – 177 de 2011.

otorgar a los litigantes la opción de habilitar términos vencidos o perseguir fines económicos, sino que tiene el propósito de brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta Magna le reconoce.

8. En consecuencia, el amparo solicitado deberá negarse por improcedente.

DECISIÓN

En virtud de las motivaciones que preceden, **el JUZGADO CINCUENTA Y SIETE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley;

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR el amparo invocado por señora JULIA NELLY ALVAREZ AVILA representada por el señor JOSE GABRIEL CALDERON CUBILLOS conforme lo expuesto en la parte considerativa.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: REMITIR el presente fallo a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en el evento que no fuera impugnada.

NOTIFÍQUESE,

**JULIAN ALBERTO BECERRA GARCÍA
JUEZ**

Firmado Por:

**Julian Alberto Becerra Garcia
Juez
Civil 057
Juzgado Municipal
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**5676e80401df15937d42e5417ea74d3eb0ea63a8711ee0caa4f9ce55732
27525**

Documento generado en 15/09/2021 11:51:34 AM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**